

**REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EMBAJADA EN ITALIA**

COMO FUNCIONA EN ITALIA LA FINANCIACION PUBLICA DE LOS PARTIDOS

EL REGIMEN PRIVATISTA

Durante toda la primera fase del ordenamiento constitucional republicano en Italia, desde 1948 a 1974, no existieron intervenciones legislativas relativas a la financiación de los partidos políticos, el que por lo tanto quedó en un ámbito estrictamente privado, tal cual había sido en el período pre-facista. En esta etapa, según un atento estudio realizado en 1971, se podían identificar cinco canales principales a los cuales los partidos políticos podían recurrir "de hecho" para hacer frente a sus necesidades financieras.

1. Contribuciones por parte de los inscritos y simpatizantes;
2. Subvenciones provenientes de organizaciones privadas externas (incluso "comisiones" sobre contratos y abastecimientos) que los partidos obtienen cuando se encuentran en posición de hegemonía en las administraciones centrales o locales;
3. Transferencia de fondos públicos, realizadas mediante prevaricaciones burocráticas, gestiones fuera de balance, contratos "negros" (y los intereses "negros" sobre depósitos bancarios) de los entes económicos estatales y paraestatales;
4. Renta de actividades especulativas, industriales y comerciales, controladas por los partidos a través de cooperativas, sociedades inmobiliarias y comerciales, intermediaciones en los intercambios con el exterior y similares;
5. Ayudas financieras del exterior, sea por parte de gobiernos extranjeros que por parte de organizaciones sindicales o privadas.

Como puede verse, esta tipología de las entradas de los partidos dejaba amplio margen a las llamadas "fuentes inconfesables", las cuales se justificaban, invocando el estado de necesidad de los partidos en ese período, en razón a la falta de congruas fuentes lícitas para financiar sus gastos.

permanente,

//..

EL REGIMEN DE FINANCIACION PUBLICA

A partir de 1961, sobre esta situación, se abrió un amplio debate político y cultural para resolver el problema de la financiación de los partidos a través de la intervención pública. En este sentido fueron presentadas varias propuestas de ley en el parlamento (por el Senador Curti, DC en 1966; Bertoldi, PSI en 1968) hasta que en 1974 se llegó a la presentación de un proyecto de ley concordado entre los partidos de la mayoría gubernamental de entonces y firmada por los respectivos jefes de los partidos Senador Piccoli, DC ; Mariotti, PSI; Cariglia, PSDI; y Reale, PRI el que fue discutido y aprobado rápidamente por la Cámara de Diputados y por el Senado. Esta propuesta se convirtió en la ley Nº 195 del 2 de mayo de 1974: "Contribución del Estado a la financiación de los partidos políticos". El relativo reglamento de actuación, aprobado por el presidente de las dos Cámaras, resultó ejecutivo con fecha 10 de julio de 1974 con decreto del presidente de la Cámara de Diputados.

La ley sobre la financiación pública de los partidos políticos ha sido sometida a referéndum popular el 11 y 12 de junio de 1978: el 56,3 % de los electores votantes (17.663.301) votaron a favor de la ley, el 43 %, (13.736.577) por su abrogación. El limitado margen de votos en la consulta popular, no obstante el hecho que casi todas las fuerzas públicas, comenzando por los grandes partidos de masa, estuvieran a favor de la ley, ha constituido una concreta demostración de lo contravertido del problema. Las sucesivas leyes emanadas sobre la materia (Nº 422 del 8 de agosto de 1980; Nº 659 del 18 de noviembre de 1981; Nº 22 del 27 de enero de 1982; Nº 441 del 5 de julio de 1982; Nº 413 del 8 de agosto de 1985) no han modificado sustancialmente la elección hecha por el parlamento italiano en 1974 la cual además de contribuir con la financiación de los gastos electorales de los partidos, en la que evidentemente éstos desarrollan funciones de interés público, financian los gastos para las demás actividades de carácter permanente.

//..

Para ambos tipos de contribución están previstos mecanismos de distribución en cuotas establecidas en forma paritaria para todos los partidos que tengan derecho, y en cuotas proporcionales en base a los consensos electorales respectivamente obtenidos.

CRITERIOS DE EROGACION DE LA FINANCIACION PUBLICA

El sistema de financiación pública de los partidos políticos adoptado en Italia consiste por lo tanto:

1. En la erogación de contribuciones por parte del estado para los gastos sostenidos por los partidos en ocasión de las elecciones de los consejos regionales, de la Cámara de Diputados, del Senado, del Parlamento Europeo;
2. Erogación por parte del estado para los gastos que implican el desarrollo ordinario de los deberes y las actividades funcionales de los partidos;

Los criterios de distribución de tales contribuciones están establecidos de la siguiente forma:

- a. Para la elección de los consejos regionales con estatuto ordinario o especial, la contribución para cada una de las elecciones está determinada según sea la suma global asignada, en base a la proporción entre la población del territorio regional interesado y la población del territorio nacional; el 20 % de la suma así determinada se reparte en partes iguales entre los partidos que hayan obtenido un candidato elegido o, en caso de elecciones concomitante, al menos un candidato elegido en una de las regiones, mientras un 80 % se reparte entre los mismos partidos en medida proporcional a los votos obtenidos.

//..

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA EN ITALIA

4.

EL S b. Para las elecciones de la Cámara y del Senado, el 20 % de la suma asignada es distribuida en partes iguales entre todos los partidos que hayan presentado, con el mismo distintivo, listas de candidatos en más de dos tercios de los colegios electorales obteniendo por lo menos un puesto en uno de ellos y un total nacional de al menos 350 mil votos válidos, o bien un número de votos no inferior al 2 % de la totalidad de los votos válidos (participando en la distribución también los partidos y las formaciones políticas que se hayan presentado con un distintivo propio a las elecciones de la Cámara o del Senado obteniendo por lo menos un cociente en las regiones en las que el estatuto especial prevea una particular tutela de las minorías idiomáticas); el 80 % de la suma asignada es, en cambio, repartida entre los mismos partidos y formaciones políticas en proporción a los votos obtenidos en las elecciones de las Cámaras.

c. Para la elección en el Parlamento europeo, el 20 % de la suma destinada se reparte en igual medida entre los partidos que hayan obtenido al menos un representante; el 80 % se reparte entre los mismos partidos en proporción a los votos obtenidos;

d. Para el cumplimiento de los deberes y las actividades de los partidos, las cantidades anualmente asignadas en los balances de la Cámara y del Senado son repartidas en un 2 % en igual medida entre todos los grupos parlamentarios; en un 75 % en forma proporcional; en un 23 % con un sistema mixto. Los presidentes de los grupos parlamentarios deben entregar a sus respectivos partidos una cantidad no inferior al 90 % de la contribución recibida: el resto puede ser utilizado para la actividad de los grupos.

Los estatutos y reglamentos de los partidos deben indicar la persona legalmente habilitada para el cobro de las contribuciones.

//..

**REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EMBAJADA EN ITALIA**

5.

EL SISTEMA DE VETO ~~estatales entre órganos centrales y periféricos de las~~
~~económicas contribuciones suelen por un monto menor que el de la~~

La ley prohíbe cualquier otra forma de financiación o contribución en favor de los partidos políticos o de sus organizaciones políticas o de grupos parlamentarios, por parte de órganos de la administración pública, de entes públicos, de sociedades con participación de capital público superior al 20 % o de sociedades por ellas controladas. Las sociedades privadas pueden erogar contribuciones o financiamientos sólo si éstos cuentan con la aprobación del órgano social competente y si dichas contribuciones aparecen regularmente inscritas en balance. Severas penas están previstas para los trasgresores. ~~aplicaciones financieras de la actividad política y las~~

Esta disciplina ha sido extendida en 1981/1982 a los financiamientos o contribuciones erogadas indirectamente a parlamentarios italianos o europeos, a consejeros regionales, provinciales o comunales, a candidatos a dichos cargos, a agrupaciones internas de partidos políticos y a personas que cubran cargos en el partido. ~~an y las formas sostenidas para la~~

Se excluyen de dicha prohibición las financiaciones concedidas directamente por institutos y empresas de créditos si éstas se realizan de acuerdo con las condiciones establecidas por el acuerdo interbancario. ~~on super-~~

~~el régimen de publicidad y para los titulares de cargos directivos en los~~

~~EL SISTEMA DE LA PUBLICIDAD~~

~~ación estatal o para aquellos a quienes se les~~

~~asegura una cierta contribución pública para~~

En cuanto al régimen de publicidad de los balances, los secretarios políticos de los partidos que hayan usufructuado de las contribuciones públicas están obligados a publicar en la prensa, antes del 31 de marzo de cada año, el balance financiero del partido del año anterior, con un informe en el cual deben ser analíticamente indicadas las propiedades inmobiliarias, las participaciones en sociedades comerciales, la totalidad de empresas, las rentas que derivan de actividades económicas, la repartición de

~~gias internas de cada partido. La regularidad del balance es a su /.../~~

las contribuciones estatales entre órganos centrales y periféricos de las eventuales contribuciones libres por un monto anual superior a los 5 millones de liras erogados al partido, a sus articulaciones político-organizativas, a sus agrupaciones internas y a grupos parlamentarios.

Para las libres contribuciones, aunque se trata de disposiciones de servicios, ha quedado establecida la obligación de declaración conjunta por parte de la persona que las emite así como de la que las recibe (o sólo por parte de este último en la hipótesis de contribuciones provenientes del exterior), la que debe ser depositada ante la presidencia de la Cámara.

El sistema de la publicidad, establecido para conferir la máxima transparencia a todas las aplicaciones financieras de la actividad política, está indirectamente complementado por las disposiciones de la ley N° 441 del 5 de julio de 1982, que obliga a los parlamentarios a hacer pública su posición patrimonial (en relación a una serie de derechos reales y de bienes), el ejercicio de las funciones de administrador o de revisor de sociedades, la declaración anual de rentas y los gastos sostenidos para la campaña electoral. Análogas obligaciones establece asimismo dicha ley para aquellos ministros ajenos al cuerpo parlamentarios, consejeros regionales, provinciales y comunales (de comunas capital de provincia o con población superior a 100 mil habitantes) y para los titulares de cargos directivos en los entes privados con participación estatal o para aquellos a quienes se les asigne una eventual contribución pública para gastos de gestión.

Corresponde principalmente al presidente de la Cámara la distribución y control de las contribuciones públicas a los partidos políticos, teniendo la obligación de incluir en sus balances la mayor parte de las sumas asignadas para estos efectos y sólo en algunos aspectos interviene el presidente del Senado.

El balance es certificado por tres censores de cuentas inscritos en el colegio profesional desde al menos 5 años y nombrados en base a las reglas internas de cada partido. La regularidad del balance es a su vez

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADA EN ITALIA

7.

controlada por un comité técnico compuesto por censores de cuentas oficiales nombrados, a inicios de cada legislatura, conjuntamente por los presidentes de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras. Los balances son publicados, con los informes y con la relación del comité técnico en el diario oficial. En caso de no cumplimiento de las obligaciones o de irregularidades en la redacción del balance, se suspende hasta su regularización, con decreto del presidente de la Cámara o del presidente del Senado según la respectiva competencia, el pago de toda contribución estatal y las relativas sumas son depositadas en el banco. Si el incumplimiento consiste en la violación de la obligación de declarar las libres contribuciones de importes superiores a 5 millones de liras, la contribución del estado para el desarrollo y las actividades del partido interesado, se deben rebajar en el doble de las contribuciones no declaradas. Quien en cambio tenía la obligación de efectuar la declaración, es sancionados en caso de incumplimiento, con una multa de 2 a 6 veces la cantidad de la suma no declarada y con la prohibición temporánea de públicos oficios. Las eventuales controversias en materia de contribuciones públicas son tratadas por la presidencia de las Cámaras, según sus respectivas competencias.

ALGUNAS OBSERVACIONES CRITICAS

En conjunto la utilidad del sistema de financiación pública de los partidos adoptado en Italia, así como resulta de los balances de los partidos presentados desde 1974, permite, luego de 13 años de experiencia aplicada, formular algunas conclusiones:

a. El sistema adoptado, mientras aparece, en términos generales, suficiente para financiar los gastos ordinarios de los pequeños partidos, cubre sólo en parte los gastos de los partidos mayores, para los cuales representa un complemento y no un sustituto de las fuentes de financiación del sistema privado.

///.

b. Parece que el sistema adoptado no resulta interesante ni para los grandes ni para los pequeños partidos, ya que igualmente recurren a fuentes ocultas o "inconfesables" de financiamiento, pues su efecto parece haber sido el de favorecer una ulterior expansión de los gastos de los partidos en lugar de obtener una correcta distribución de los ya existentes;

c. El sistema adoptado no permite un eficaz control externo ni interno a los partidos beneficiarios, acerca del efectivo empleo de los fondos públicos erogados;

d. El sistema adoptado favorece la concentración del poder en las oligarquías de las direcciones centrales de los partidos, que se ocupan de la distribución de fondos, desfavoreciendo en cambio las corrientes de minoría y las organizaciones periféricas.

A éstas y otras similares observaciones los sostenedores de la financiación pública oponen, junto con otras consideraciones, un hecho difícilmente impugnable: en las complejas sociedades modernas los gastos de los partidos para el desarrollo de las funciones que les son encomendadas en un régimen democrático, no obstante cualquier limitación legislativa, son de todos modos de dimensiones tales que no pueden ser enfrentadas solamente con las contribuciones voluntarias de los inscritos y los simpatizantes.

El tema se convierte nuevamente en actualidad en vista del pedido de reevaluación de la contribución financiera del estado a los partidos. Es necesario entre otras cosas, hacer presente que los resultados poco convincentes obtenidos hasta ahora con la aplicación del sistema vigente, y que no se refiere ciertamente al monto de las contribuciones, plantean sobre todo el problema de una sustancial revisión de la "filosofía" misma del sistema. Una solución no descartable podría ser la de sustituir las contribuciones en dinero, del todo o en parte, con la puesta a disposición gratuita de determinados servicios y prestaciones a favor de los partidos, acompañada de una drástica limitación de algunos rubros de gastos, en particular aquellos electorales.

Come funziona in Italia il finanziamento pubblico dei partiti

Il regime privatistico.

Per tutta la prima fase di funzionamento dell'ordinamento costituzionale repubblicano in Italia, dal 1948 al 1974, non vi sono stati interventi legislativi sul finanziamento dei partiti politici, che pertanto è rimasto nell'ambito strettamente privatistico, così come era stato nel periodo pre-fascista. In questa fase, secondo un accurato studio condotto nel 1971 (R. CRESPI, *Lo Stato deve pagare i partiti?*, Sansoni, Firenze 1971), si potevano identificare cinque principali canali cui i partiti politici ricorrevano "di fatto" per sopperire ai loro fabbisogni finanziari:

1) contributi degli iscritti e dei simpatizzanti;

2) sovvenzioni provenienti da organismi privati esterni (comprese le "provvigioni" su contratti e forniture che i partiti ricavano quando vengono a trovarsi in posizione egemonica nelle amministrazioni centrali e locali);

3) distrazioni di pubblico denaro, attuate mediante le prevaricazioni burocratiche, le gestioni fuori bilancio, i contratti "neri" (e gli interessi "neri" sui depositi bancari) degli enti economici statali e parastatali;

4) redditi di attività affaristiche, industriali e commerciali, controllate dai partiti, tramite cooperative, società immobiliari e commerciali, intermediazioni negli scambi con l'estero, e simili;

5) aiuti finanziari dall'estero, sia da parte di governi stranieri, sia da parte di organizzazioni sindacali o private.

Come si vede, questa tipologia delle entrate dei partiti lasciava largo spazio alle cosiddette "fonti inconfessabili", per giustificare le quali si è a lungo invocato lo stato di necessità in cui i partiti si sarebbero trovati in quel pe-

riale pubblico superiore al 20% o di società da esse controllate. Le società private possono erogare finanziamenti o contributi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Penne severe sono previste per i trasgressori.

Questa disciplina è stata estesa nel 1981-1982 ai finanziamenti o contributi erogati anche indirettamente a partiti, nazionali od europei, e consigli regionali, provinciali o comunali, e pure a chi le presta corriere, a ragione di 10 milioni di lire per ogni partito politico o consiglio comunale.

I finanziamenti nel 1987
(in miliardi di lire)

Partiti	Camera	Senato	Rimborso Elezioni '87	Totale
DC	16,343	8,595	8,917	33,855
PCI	13,120	6,735	7,023	26,878
PSI	6,344	3,335	3,977	13,656
MSI	4,239	1,987	1,916	8,142
PRI	3,384	1,603	1,374	6,361
PSDI	2,924	1,410	1,190	5,524
PR	2,068	0,771	1,093	3,932
Verdi (1)	—	—	1,081	1,081
PLI	2,529	1,218	0,979	4,726
DP	1,937	—	0,872	2,809
S.I. (2)	1,553	1,229	—	2,782

(1) I Verdi riceveranno il finanziamento a partire dal 1988.

(2) La Sinistra Indipendente non ha ricevuto rimborsi elettorali perché i suoi eletti si sono presentati nelle liste del PCI.

riodo, in mancanza di congrue fonti lecite, per finanziare le loro spese.

Il regime del finanziamento pubblico.

Da questa situazione ha preso le mosse anche in Italia, a partire dal 1961, un ampio dibattito politico e culturale inteso a risolvere il problema del finanziamento dei partiti attraverso l'intervento pubblico. In questo senso furono presentate anche proposte di legge in Parlamento (dall'on. Curti, democristiano, nel 1966; dall'on. Bertoldi, socialista nel 1968); finché nel 1974 si addivenne alla presentazione di una proposta di legge concordata tra i partiti della maggioranza go-

vernativa di allora e sottoscritta dai rispettivi capigruppo on. Piccioli (DC), Mariotti (PSI), Cariglia (PSDI) e Reale (PRI), che fu discussa e approvata rapidamente dalla Camera dei deputati e dal Senato, divenendo la legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici". Il relativo regolamento di attuazione, approvato dalle presidenze delle due Camere, è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Camera dei deputati in data 10 luglio 1974.

La legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici è stata sottoposta a "referendum" popolare nei giorni 11-12 giugno 1978: il 56,3% degli elettori votanti (17.663.301) ha votato a favore della legge, il 43%

(13.736.577) per la sua abrogazione. Il limitato scarto di voti nella consultazione popolare, nonostante che quasi tutte le forze pubbliche, a cominciare dai grandi partiti di massa, si fossero schierate a favore della legge, ha costituito una concreta dimostrazione di quanto il problema sia ancora controverso nell'opinione pubblica italiana.

Le successive leggi emanate su questa materia (legge 8 agosto 1980, n. 422; legge 18 novembre 1981, n. 659; legge 27 gennaio 1982, n. 22; legge 5 luglio 1982, n. 441; legge 8 agosto 1985, n. 413) non hanno sostanzialmente modificato la scelta compiuta dal Parlamento italiano nel 1974, che è nel senso di contribuire con il finanziamento pubblico non solo alle spese elettorali dei partiti, in cui più evidentemente essi esplicano funzioni di interesse pubblico, ma anche alle spese per le altre loro attività di carattere permanente. Per entrambi i tipi di contributi sono previsti meccanismi di ripartizione per quote stabilite in misura paritetica per tutti i partiti che ne hanno diritto, e per quote commisurate in proporzione ai consensi elettorali rispettivamente ottenuti.

Criteri di erogazione del finanziamento pubblico.

Il sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici adottato in Italia consiste pertanto:

1) nell'erogazione di contributi da parte dello Stato per le spese sostenute dai partiti in occasione dell'elezione dei Consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato, del Parlamento europeo;

2) nell'erogazione di contributi da parte dello Stato per spese sostenute per l'esplicazione ordinaria dei compiti e delle attività funzionali dei partiti.

I criteri di ripartizione di tali contributi sono così stabiliti:

a) per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo per ciascuna elezione è determinato, nell'ambito della somma complessivamente stanziata, in base alla proporzione tra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale; il 20% della somma così determinata è ripartito in misura uguale tra i partiti che abbiano ottenuto un proprio candidato eletto o, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candi-

dato eletto in una delle regioni, mentre l'80% è ripartito tra gli stessi partiti in misura proporzionale ai voti ottenuti;

b) per le elezioni della Camera e del Senato, il 20% della somma stanziata per ciascuna elezione è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione in più dei due terzi dei collegi elettorali, ottenendo almeno un seggio in uno di essi e un totale nazionale di almeno 350 mila voti validi, oppure un numero di voti non inferiore al 2% dei voti validi complessivi (partecipano al riparto anche i partiti e le formazioni politiche che si siano presentati con proprio contrassegno alle elezioni della Camera o del Senato ottenendo almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche); l'80% della somma stanziata è invece ripartito tra gli stessi partiti e formazioni politiche, in proporzione ai voti ottenuti per l'elezione della Camera;

c) per l'elezione del Parlamento europeo, il 20% della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante; l'80% è ripartito tra gli stessi partiti in misura proporzionale ai voti ottenuti;

d) per l'esplicazione dei compiti è per l'attività funzionale dei partiti, le somme annualmente stanziate a questo titolo nei bilanci della Camera e del Senato sono ripartite, per il 2% in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari; per il 75% in misura proporzionale; per il 23% con un sistema misto. I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 90% del contributo così riscosso; il resto può essere utilizzato per l'attività dei gruppi.

Gli statuti e i regolamenti dei partiti debbono indicare il soggetto legalmente abilitato alla riscossione dei contributi.

Il sistema dei divieti.

La legge vieta ogni altra forma di finanziamento o contributo a favore dei partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative o di gruppi parlamentari da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di ca-

pitale pubblico superiore al 20% o di società da esse controllate. Le società private possono erogare finanziamenti o contributi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Penne severe sono previste per i trasgressori.

Questa disciplina è stata estesa nel 1981-1982 ai finanziamenti o contributi erogati anche indirettamente a parlamentari italiani od europei, a consiglieri regionali, provinciali o comunali, a candidati alle predette cariche, a raggruppamenti interni di partiti politici e a persone che rivestano cariche di partito.

Sono esclusi dal divieto i finanziamenti direttamente concessi da istituti ed aziende di credito alle condizioni previste dell'accordo interbancario.

Il sistema della pubblicità.

Quanto al regime di pubblicità dei bilanci, i segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi pubblici sono tenuti a pubblicare sulla stampa, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio finanziario consuntivo del partito per l'anno precedente, con una relazione in cui devono essere analiticamente indicate le proprietà immobiliari, le partecipazioni a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche, la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici e le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a 5 milioni di lire erogate al partito, alle sue articolazioni politico-organizzative, ai suoi raggruppamenti interni e ai gruppi parlamentari.

Per queste libere contribuzioni, anche se consistano nella messa a disposizione di servizi, è stato stabilito l'obbligo di dichiarazione congiunta da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve (o solo di quest'ultimo, nell'ipotesi di contributi di provenienza estera), da depositare presso la Presidenza della Camera.

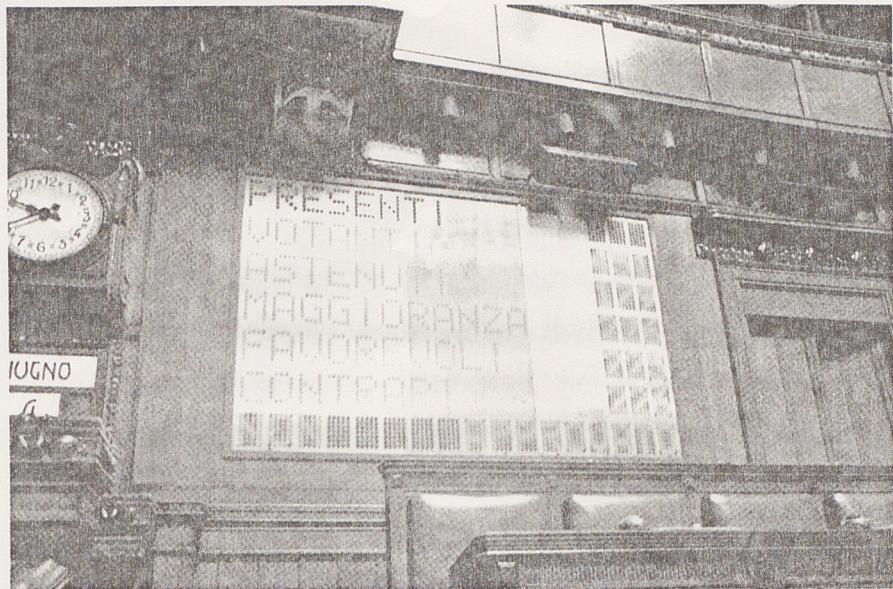
Il sistema della pubblicità, diretto a conferire la massima possibile trasparenza a tutte le implicazioni finanziarie dell'attività politica, è indirettamente completato dalle disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, che obbligano i parlamentari a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale (in relazione ad una serie di diritti reali e di beni), l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sinda-

co di società, la dichiarazione annuale dei redditi e le spese sostenute per la propaganda elettorale. Analoghi obblighi sono stabiliti dalla stessa legge per i ministri non facenti parte del Regolamento, per i consiglieri regionali, provinciali e comunali (di comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti) e per i titolari di cariche direttive negli enti pubblici anche economici e negli enti privati a partecipazione statale o per i quali vi sia un rilevante contributo pubblico nelle spese di gestione.

Il sistema dei controlli.

La competenza per l'erogazione dei contributi pubblici ai partiti politici e per i relativi controlli spetta al Presidente della Camera, nei cui bilanci viene iscritta la maggior parte delle somme stanziate a questo titolo; e solo per qualche aspetto al Presidente del Senato. Il bilancio è certificato da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito. La regolarità del bilancio è poi controllata da un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti nominati, all'inizio di ogni legislatura, congiuntamente dalle Conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. I bilanci sono poi pubblicati, con le relazioni e con il rapporto del Comitato tecnico sulla "Gazzetta ufficiale".

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione, con decreto del Presidente della Camera o del Presidente del Senato secondo la rispettiva competenza, il versamento di ogni contributo statale, e le relative somme sono versate in banca. Se l'inottemperanza consiste nella violazione dell'obbligo di dichiarare le libere contribuzioni di importi superiori a 5 milioni lire, il contributo statale per l'esplicazione dei compiti e per l'attività funzionale del partito interessato, è decurtato in misura doppia di quella delle contribuzioni non dichiarate. Chi aveva l'obbligo della dichiarazione è invece punito, in caso di inottemperanza, con una multa da 2 a 6 volte dell'ammontare non dichiarato e con l'interdizione temporanea da pubblici uffici. Le eventuali controversie in materia di contributi pubblici sono decise dagli



Il tabellone elettronico nell'Aula di Montecitorio.

Uffici di Presidenza delle Camere, secondo le rispettive competenze.

Qualche osservazione critica.

Il rendimento complessivo del sistema di finanziamento pubblico dei partiti adottato in Italia, quale risulta dai bilanci dei partiti stessi pubblicati a partire dal 1974, consente, dopo 13 anni di esperienza applicativa, di formulare alcune conclusioni:

a) il sistema adottato, mentre appare in genere sufficiente a finanziare le spese ordinarie dei piccoli partiti, non copre che una parte delle spese dei partiti maggiori, per i quali soprattutto si presenta come aggiuntivo e non sostitutivo delle fonti di finanziamento utilizzate in regime privatistico;

b) non sembra che il sistema adottato sia tale da scoraggiare in misura apprezzabile i partiti grandi e piccoli dal ricorrere a fonti di finanziamento occulte o "inconfessabili", posto che il suo effetto sembra essere stato quello di favorire una ulteriore espansione delle spese dei partiti, piuttosto che una più corretta copertura di quelle esistenti;

c) il sistema adottato non consente un efficace sistema di controllo né esterno né interno ai partiti beneficiari, sull'effettivo impiego dei fondi pubblici erogati;

d) il sistema adottato favorisce l'accentramento dei poteri nelle oligarchie delle direzioni centrali dei partiti, che provvedono alla distribuzione dei fon-

di, sfavorendo invece le correnti di minoranza e le organizzazioni periferiche.

A queste e a consimili osservazioni i sostenitori del finanziamento pubblico oppongono, insieme ad altre considerazioni, un dato di fatto difficilmente oppugnabile: nelle complesse società moderne le spese dei partiti per lo svolgimento delle funzioni loro affidate nell'ambito di un regime democratico, nonostante qualsiasi limitazione legislativa, sono comunque di dimensioni tali da non poter essere coperte soltanto con i contributi volontari degli iscritti e dei simpatizzanti.

Il discorso torna ora d'attualità, per la richiesta di una sostanziale rivalutazione dell'attuale ammontare del contributo finanziario dello Stato ai partiti. Ci si consenta peraltro di osservare che i risultati poco convincenti cui ha dato luogo finora l'applicazione del sistema vigente, e che non si riferiscono certo all'ammontare dei contributi, pongono piuttosto il problema di una sostanziale revisione della "filosofia" stessa del sistema. Una soluzione da esplorare potrebbe essere allora quella di sostituire i contributi in denaro, in tutto o in parte, con la messa a disposizione gratuita di determinati servizi e prestazioni a favore dei partiti, accompagnata da una drastica limitazione di talune categorie di spese, in particolare di quelle elettorali.

Gian Franco Ciaurro